

Santiago, siete de febrero de dos mil veintidós.

Al escrito folio 9839-2022: a lo principal y primer otrosí, téngase presente; al segundo otrosí, a sus antecedentes.

A los escritos folios 9840-2022, 9865-2022, 9866-2022 y 10017-2022: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 10018-2022: no ha lugar, por extemporáneo.

Visto y teniendo únicamente presente:

PRIMERO: Que para resolver el presente recurso, es preciso tener presente que el Estado de Chile ha ratificado, y se encuentra en vigencia, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, que se aplica, entre otros casos a las personas que debido a fundados temores de ser perseguidas por *“motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos*
35.

SEGUNDO: Que, a su turno, la Ley N° 20.430, sobre Protección de Refugiados, establece en su Art. 1 que *“Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los solicitantes de la condición de refugiado o a los refugiados, desde que se encuentren en territorio nacional”*; y en su Art. 2 respecto del concepto de refugiado, preceptúa lo siguiente en sus dos primeros numerales:
“Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. *Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores.*



2. *Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país.”*

Finalmente, y respecto de los principios que informan la citada Ley, contenidos en su artículo 3°, entre otros se incluyen el de “no devolución”, el de “no discriminación” y el de “trato más favorable posible”.

Enseguida, conforme al artículo 25 de dicha Ley N° 20.430, el procedimiento administrativo de reconocimiento de la condición de refugiado se rige supletoriamente por las disposiciones de la Ley 19.880. Así se tiene que uno de sus principios inspiradores es el de celeridad.

De lo reseñado precedentemente resulta entonces que una solicitud de refugio como la planteada por la recurrente de amparo debe recibir un tratamiento especial (“el trato más favorable posible”) y que, en particular, ha de estar sujeto a un régimen de prontitud, inmediatez y oportunidad;

TERCERO: Que conforme a los hechos antes establecidos, resulta manifiesto que el Servicio de Extranjería y Migración ha incumplido con los deberes que le imponen tanto los convenios de Derecho de los Derechos Humanos (que, conforme al Art. 5 inciso segundo de la Constitución, el Estado y sus órganos tienen obligación de respetar y promover), como las disposiciones legales antes citadas le imponen. En especial, por la circunstancia que, requerido por la parte recurrente el inicio del procedimiento para que se le reconociera la calidad de refugiados por razones médicas, ha retardado la tramitación oportuna de dicho requerimiento, no obstante la urgencia que el caso amerita.



Luego, claramente no se adoptaron las medidas para iniciar de inmediato el procedimiento respectivo, infringiéndose de esa manera el deber impuesto por la normativa antes invocada y la celeridad que el caso aconseja.

CUARTO: Que al obrarse de la manera anterior por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se afectó el derecho de la recurrente, que le confiere la Ley N° 20.430, de someter en el más breve plazo al conocimiento de la autoridad pertinente su requerimiento de reconocerle la calidad de refugiado. Tal omisión deviene, en consecuencia, en ilegal y, en este caso en particular, se traduce en una amenaza seria e inminente a la libertad ambulatoria de la parte recurrente.

QUINTO: Que en la especie debe tenerse en consideración el principio de reunificación familiar, ya que de mantenerse la decisión de la autoridad administrativa ocasionará la separación del amparado, por cuanto tiene una hija con residencia en Chile, por lo que la concurrencia de tal supuesto implica que la medida de infringe lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de la República, en sus incisos primero y último, en cuanto establecen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle protección.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, Decreto Ley N°1094 de 1975 del Ministerio del Interior, **se revoca** la sentencia apelada de catorce de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 12-2022 y en su lugar se declara que **se acoge** la acción constitucional de amparo deducida en favor de **Carmen Haydee Parada Velásquez** de nacionalidad Venezolana, consecuentemente se ordena a la Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, autorizar el ingreso al país de la amparada, previo



cumplimiento de la normativa sanitaria dispuesta al efecto, para dar curso a su solicitud de refugio, debiendo el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ingresar la solicitud que dé inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte actora, en un plazo de treinta días a contar de la fecha de dictación del presente fallo.

Acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Sr. Biel, quien estuvo por confirmar la sentencia en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Regístrese, comuníquese por la vía más expedita y, una vez hecho, devuélvase.

Rol N° 3265 -2022



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S. y los Ministros (as) Suplentes Rodrigo Biel M., Miguel Eduardo Vázquez P. Santiago, siete de febrero de dos mil veintidós.

En Santiago, a siete de febrero de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

